

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

DEMANDANTE	Carlos Alberto Jiménez Luque
DEMANDADAS	i) Junta Nacional de Calificación de Invalidez y ii) Aseguradora de Riesgos Laborales Suramericana S.A. ARL Sura
VINCULADO	Junta Regional de Calificación de Invalidez
RADICADO UNICO NACIONAL	05001 31 05 008 2018 00152 01
TIPO DE PROCESO	Ordinario
DECISIÓN	Confirma
ACTA DE DECISIÓN	059 de 2021

Medellín, catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021)

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, proceden en esta oportunidad a resolver la apelación interpuesta por el apoderado de la accionada ARL Sura, contra la decisión del 5 de febrero de 2020 que deniega nulidad.

A continuación, se toma la decisión correspondiente, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Con la demanda se pretende la declaración del estado de invalidez del demandante y el consecuente reconocimiento de su pensión de invalidez. En esta se solicitó como prueba pericial la determinación de la PCL del demandante, origen y fecha de estructuración.

Al contestar la demanda, ARL Sura presentó oposición frente al dictamen pericial, alegando violación al debido proceso constitucional, violación a norma de orden público y de obligatorio cumplimiento. Indicó que la petición es improcedente porque el artículo 226 del CGP no da la posibilidad de pedir un dictamen pericial a la vieja usanza, al deberse presentar desde la presentación de la demanda, lo cual no se cumplió en este caso

En la audiencia del artículo 77 del CPT y de la S.S. la a quo decretó el dictamen pericial solicitado por el demandante, y ordenó su remisión a la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Frente a la oposición presentada por ARL Sura citó el artículo 51 del CPT y de la S.S., y el parágrafo 3° del artículo 4° del Decreto 1352 de 2013, concluyendo que la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia es una entidad competente para el tema de calificación laboral, por lo que se mantuvo en la decisión.

Ante dicha decisión el apoderado de ARL Sura presentó recurso de reposición y propuso nulidad procesal, indicando básicamente que desde la vigencia del Código General del Proceso se estableció que la oportunidad para presentar los dictámenes periciales en relación con la parte demandante, era con la presentación de la demanda, por lo que al decretarse dicha prueba en la audiencia se violan las normas de orden público y de obligatorio cumplimiento establecidas en el C.G.P. aplicables por analogía al procedimiento laboral, lo que constituye una violación al debido proceso constitucional a su representada.

Al resolver la reposición la juzgadora de primera instancia reiteró lo argumentado y se mantuvo en la decisión de ordenar el dictamen pericial, por considerarlo necesario para tomar una decisión de fondo.

Se brindó traslado de la nulidad a la parte demandante, quien solicitó sea negada, y posteriormente procedió la a quo a considerar que no se cumple con la técnica para alegar la nulidad conforme a los artículos 133, 134 y ss del C.G.P., e impuso costas en la suma de 2 SMLMV.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con dicha decisión, el apoderado de la accionada ALR Sura interpuso el recurso de apelación, indicando que es cierto que las nulidades del C.G.P. son taxativas, pero la jurisprudencia de las altas cortes ha indicado que cuando se viola el debido proceso como derecho constitucional de las partes, hay lugar a decretar las nulidades procesales.

Afirma que esa es la excepción a cuando no es taxativa conforme al C.G.P., y fue la razón por la cual se invocó desde que se propuso la nulidad frente al auto de decreto de pruebas, porque se están violando las normas de orden público y de obligatorio cumplimiento establecidas en el estatuto procesal en comento, en tanto los dictámenes periciales deben ser aportados al momento de presentar la demanda, lo cual no ocurrió en este proceso. Por lo que al violarse las disposiciones de los artículos 226 y 227 del CGP, al haberse decretado como prueba la solicitada por la parte demandante, se violan los postulados del debido proceso, del derecho de contradicción y defensa. Concluye que la nulidad debe ser decretada porque el auto que decretó la prueba está en contravía con las disposiciones procesales que se ciñen a estos ritos.

Solicita, que de mantenerse el auto que decretó la prueba, se haga énfasis en cómo se decreta la prueba de acuerdo a la fijación del litigio. Agregó que si se acepta el decreto de prueba frente a una prueba pericial para la calificación del demandante, debe

tenerse en cuenta que lo demandado es la nulidad de los dictámenes de la Junta Nacional, por lo que el dictamen pericial debe ceñirse exclusivamente a si esos dictámenes de la Junta Nacional están viciados de algún error o nulidad, o si por el contrario estuvieron ajustados a derecho.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de la accionada ARL Sura presentó alegatos de conclusión, reiterando lo argumentado en su recurso de alzada.

Así mismo, la parte demandante presentó alegatos de conclusión, solicitando se niegue el recurso por improcedente, conforme a la doctrina jurisprudencial que ha proferido la Honorable Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín en reiterados pronunciamientos, sobre el tema en el que se sustenta el presente recurso de apelación.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico consiste en determinar si se encuentra configurada la nulidad constitucional invocada por la parte recurrente, para lo cual deberá analizarse el trámite frente al dictamen pericial en el procedimiento laboral y de la seguridad social.

CONSIDERACIONES

El análisis versará sobre lo que fue objeto de recurso conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 que alude al principio de la consonancia, en virtud del cual la actividad de la segunda instancia se restringe a los puntos concretos de inconformidad.

Lo alegado por el recurrente se centra en la violación al derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, pues en sentir del apoderado se violan las normas de orden público y de obligatorio cumplimiento

establecidas por el Código General Proceso, en tanto los dictámenes periciales deben ser aportados al momento de presentarse la demanda.

En lo que respecta al procedimiento laboral, la prueba pericial está mencionada en el artículo 51 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social así:

“MEDIOS DE PRUEBA. Son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley, pero la prueba pericial sólo tendrá lugar cuando el Juez estime que debe designar un perito que lo asesore en los asuntos que requieran conocimientos especiales”.

De lo regulado en dicha norma es claro que la prueba pericial pertenece al juez, y únicamente tendrá lugar cuando él lo estime conveniente para valerse de ella cuando tenga dudas en el proceso. Lo que no ocurre en el proceso civil, en el cual dicha prueba pertenece igualmente a las partes, conforme se advierte del artículo 226 del Código General Proceso, el cual indica:

“PROCEDENCIA. La prueba pericial es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos.
Sobre un mismo hecho o materia cada sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen pericial. Todo dictamen se rendirá por un perito”.

Ahora, en cuanto a las formas propias de cada proceso, específicamente frente a la prueba pericial, se advierte que el proceso ordinario laboral es notoriamente distinto al proceso civil previsto en el Código General del proceso.

Respecto al primero, la Ley 1149 de 2007 señala la existencia de dos audiencias que no pueden ser suspendidas. En relación con el dictamen pericial indica el numeral 4° del párrafo 1° del artículo 11°, modificadorio del artículo 77 del C.P.T. y de la S.S. lo siguiente:

“A continuación el juez decretará las pruebas que fueren conducentes y necesarias, señalará día y hora para audiencia de trámite y juzgamiento, que habrá de celebrarse dentro de los tres (3) meses siguientes; extenderá las órdenes de

comparendo que sean del caso, bajo los apremios legales, y tomará todas las medidas necesarias para la práctica de pruebas en la audiencia de trámite y juzgamiento; y respecto al dictamen pericial ordenará su traslado a las partes con antelación suficiente a la fecha de esta audiencia.”

Lo anterior quiere decir, que el dictamen pericial siempre será presentado por escrito, en el interregno entre la audiencia del artículo 77 y 80 del estatuto en comento, una vez el juez lo haya decretado, nombrado al perito, y se le haya entregado el objeto del experticio, momento en el cual le deberá dar un término preciso para su presentación en el citado lapso. Cuando sea presentado deberá darle traslado a las partes para que lo conozcan e intervengan con respecto a el mismo, ello por la potísima razón que la última audiencia mencionada no puede ser suspendida, debiéndose agotar todas sus etapas hasta llegar a la decisión final.

En el proceso civil, por el contrario, las audiencias pueden ser objeto de suspensión, incluso, conforme al artículo 228 del CGP:

“Si se excusa al perito, antes de su intervención en la audiencia, por fuerza mayor o caso fortuito, el juez recaudará las demás pruebas y suspenderá la audiencia para continuarla en nueva fecha y hora que señalará antes de cerrarla, en la cual se interrogará al experto y se surtirán las etapas del proceso pendientes”.

Lo anterior es relevante, porque la norma laboral expresamente prohíbe la suspensión, pues terminada la etapa probatoria y de alegatos de conclusión, sólo permite un receso de una hora para fallar sobre este asunto.

Dados los intereses y pretensiones tan caros que se discuten frente a los trabajadores y a los usuarios de la seguridad social, no puede el procesal laboral suspender la audiencia, ni negar valor al dictamen por la inasistencia del perito, por cuanto la verdad material debe encontrarse de manera rápida y con economía, no solamente procesal sino de costos económicos para la parte. En cambio, en el proceso civil “Si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor”¹, debiéndose realizar otro

¹ Artículo 228 CGP

nuevo si se quiere encontrar la verdad, lo cual es costoso y atenta contra el principio de gratuidad y celeridad procesal en laboral.

La exigencia de que la parte demandante acuda a realizar su propio experticio y lo presente con la demanda o su contestación, si bien no es prohibida, es ajena al proceso laboral y a los principios que lo rigen, donde es el trabajador o el usuario de la seguridad social la parte débil del proceso.

Así, a juicio de esta Sala, en este caso no se aplica el procedimiento establecido en el C.G.P. frente al dictamen pericial como lo alega el recurrente, máxime que ninguna de las partes presentó dictamen en favor y en contra de la parte contraria, este fue solicitado en la demanda, el cual fue objeto de decreto de prueba, lo que implica la presentación de un dictamen dentro del proceso, siendo el juez de la causa como director del proceso, quien a su leal saber y entender, podrá determinar lo necesario para que esta prueba le dé claridad, como un mero instrumento para un mejor proveer en su decisión final.

Se destaca que en el proceso laboral el dictamen pericial siempre será escrito, sin necesidad de presentarse verbalmente al no preverse esta circunstancia, por lo anterior podría considerarse el inciso segundo del parágrafo del artículo 228 del CGP, que trata de la contradicción del dictamen en los procesos de filiación, interdicción por discapacidad mental absoluta e inhabilitación por discapacidad mental relativa, donde el dictamen se rinde por escrito:

“En estos casos, se correrá traslado del dictamen por tres (3) días, término dentro del cual se podrá solicitar la aclaración, complementación o la práctica de uno nuevo, a costa del interesado, mediante solicitud debidamente motivada. Si se pide un nuevo dictamen deberán precisarse los errores que se estiman presentes en el primer dictamen”.

En su defecto, podría el juez aplicar el artículo 40 del CPTSS, que trata de la libertad de formas, para efectos de hacer efectivo el derecho de defensa de las partes y la construcción del procedimiento de aclaración, complementación o aun, la práctica de

un nuevo dictamen cuando considere que el presentado no reúne las características previstas en el artículo 227 del CGP.

Conforme a lo expuesto, no se advierte la violación de las normas invocadas por el recurrente, ni la configuración de la nulidad alegada, pues el decreto de la prueba pericial posee pleno respaldo en el estatuto procesal del trabajo y de la seguridad social, por lo cual se **CONFIRMARÁ** la decisión.

Costas en esta instancia a cargo de recurrente por resultar vencido con su recurso de alzada. Se fijan las agencias en derecho en la suma de \$908.526, en favor de la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión que se revisa en virtud del recurso de apelación, presentado por el apoderado de la demandada ARL Sura, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: Costas en esta instancia a cargo de la demandada ARL Sura por resultar vencida con su recurso de alzada. Se fijan las agencias en derecho en la suma de \$ 908.526, en favor de la parte demandante.

Lo resuelto se notifica en **ESTADOS**.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° 62 del 15 de Abril de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ

MAGISTRADO

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ

MAGISTRADO

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

FRANCISCO ARANGO TORRES

MAGISTRADO

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA
CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

752bb1133fc38123057f0c1e3ac94e0b95e00fe327800fcf6fdabbfcf93d3ae8

Documento generado en 14/04/2021 02:51:55 PM